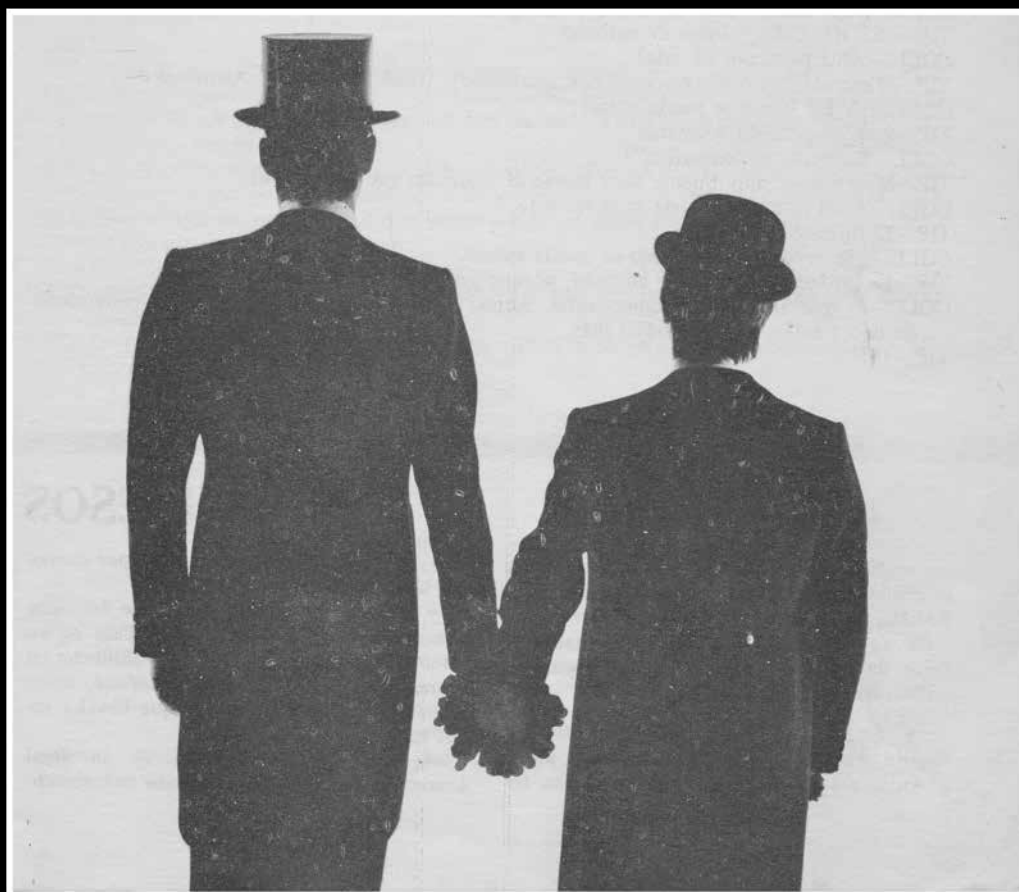


El mito en crisis. A vueltas sobre la Transición

E M M A N U E L R O D R Í G U E Z

Sociólogo. Doctor en Historia. Participa en la Fundación de los Comunes y en el Observatorio Metropolitano de Madrid

La Transición ha sido el modelo político que ha exportado España al resto de países que pretendían salir de las dictaduras e incorporarse a la vida democrática. Su principal valor es que permitió el traspaso entre dos regímenes políticos sin «traumas», esto es, sin modificaciones sustanciales en las relaciones de poder y en la posición de los principales intereses económicos y financieros.





ENTRE LA MUERTE DE FRANCO Y 1982, CERCA DE 600 PERSONAS PERDIERON LA VIDA ENTRE ASESINATOS DE LAS FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO, GRUPOS PARAMILITARES Y LAS FORMACIONES ARMADAS DE LA EXTREMA IZQUIERDA, PRINCIPALMENTE LA ETA VASCA.

Al igual que otros «productos» de origen español – como el modelo económico de base inmobiliaria o recientemente su selección de fútbol–, la Transición a la democracia ha pasado por ser uno de las principales firmas de exportación del país, emblema a su vez de su modernidad. Establecida por convención entre la muerte de Franco (noviembre de 1975) y el ascenso al poder de los socialistas (octubre de 1982), la Transición española se ha presentado como un prototipo político para la salida tanto de las dictaduras del latinoamericanas durante la década de 1980, como para las nuevas democracias de Europa del Este, a partir de 1989. Convertida en instrumento de marketing para nuevas y viejas élites, así como en un conveniente programa estratégico, el principal valor de la Transición española es que permitió el traspaso entre dos regímenes políticos sin «traumas», esto es, sin modificaciones sustanciales en las relaciones de poder y en la posición de los principales intereses económicos y financieros.

Un pueblo pacífico y responsable dispuesto a hacer sacrificios, un sentido de responsabilidad de Estado compartido por las élites de uno y otro lado, una mayoría social consciente de los límites de la democracia posible, un cambio incruento y pacífico apenas manchado por la violencia de los extremos, y una colección de figuras (Suá-

rez y el rey principalmente) capaces de conducir el cambio. La fábrica de la memoria de la Transición se ha compuesto con materiales y actores diversos. Se trata de un típico y necesario “cuento” cultural a la legitimación del cambio político, en el que han contribuido desde la prensa y el *establishment* periodístico del país, hasta buena parte de la historiografía académica. En términos propiamente «pop», la pieza más importante y que más ha contribuido a la canonización de la Transición ha sido la serie documental del mismo nombre, producida por Radio Televisión Española y dirigida por los periodistas Elías Andrés y Victoria Prego. Organizada en trece capítulos, prácticamente no ha habido año en el que la entidad pública no emitiera la serie completa al gran público. Hecha de documentales, reportajes, artículos periodísticos e innumerables exposiciones en Museos y Centros de Arte, la memoria de la Transición también se ha alimentado de una historiografía pacificada y congraciada con el régimen, en la que la democracia española aparece como suficiente y necesaria en la onda larga de la modernización del país.¹

La trastienda del modelo

No obstante, esta imagen de la Transición, que nunca ahogó del todo la crítica,² se está viendo cada vez más



ENTRE 1976 Y 1979 SE PRODUJERON CERCA DE 9.000 HUELGAS Y LA CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE CASI 60 MILLONES DE JORNADAS DE TRABAJO

cuarteada por un debate amplio y masivo que ya no se limita a la historiografía. Tres son los principales elementos sobre los que se concentra la revisión del periodo y que tienen que ver con la posición de los principales actores en juego: (1) el reconocimiento de que la Transición vino marcada por una intensa agitación social, que se debe colocar en la base del cambio político³; (2) la reconsideración del papel de las élites franquistas en la dirección del proceso de cambio político; y (3) la reevaluación de la Transición como un pacto entre las élites franquistas y una oposición de izquierdas,⁴ que a su notable debilidad sumó un considerable número de errores políticos, lo que finalmente le llevó a comprometerse con un régimen que en muchos aspectos era deudor del anterior.

Desde esta perspectiva, y en relación con el primer elemento, la Transición española aparece como un periodo extraordinariamente agitado, por no decir violento y traumático. Entre la muerte de Franco y 1982, cerca de 600 personas perdieron la vida entre asesinatos de las

Fuerzas de Orden Público, grupos paramilitares y las formaciones armadas de la extrema izquierda, principalmente la ETA vasca.⁵ La cifra es veinte veces mayor que la de los últimos siete años del franquismo, incluyendo las penas de muerte. Por su parte, la conflictividad obrera alcanzó cotas que en Europa sólo tienen parangón con el norte de Italia. Entre 1976 y 1979 se produjeron cerca de 9.000 huelgas y la consiguiente pérdida de casi 60 millones de jornadas de trabajo. Por si esto resultara poco, a partir de principios de los años setenta, la conflictividad obrera empezó a extenderse sobre el territorio empujando una miríada de demandas relativas al deficitario urbanismo de la época, el sistema de transportes y las dotaciones sanitarias y educativas.⁶

Este es el trasfondo de la Transición, o por decirlo sucintamente «el problema» al que las élites del país, así como las cancillerías europeas y los intereses estadounidenses tuvieron que hacer frente. A este respecto conviene considerar que bastante antes de la muerte de Fran-

co y también del primer pico del petróleo, la presión del movimiento obrero estaba teniendo importantes efectos en el ciclo de acumulación. Durante casi toda la década de 1970 los incrementos salariales nominales impuestos por las huelgas se impulsaron hasta ocupar la banda del 19-27 %, apenas compensados por una inflación que en 1975 alcanzó el 20 %. La formación de la espiral salarios-precios se acompañó también de un considerable incremento del gasto del Estado, que aún muy por debajo de los niveles europeos, se vio forzado a hacer importantes inversiones en equipamientos sociales de todo tipo.

El protagonismo de la movilización social durante el periodo remite al segundo aspecto de la revisión de la Transición, y en el que destaca la capacidad de las élites franquistas para impulsar el cambio político. Uno de los lugares comunes de la historiografía progresista ha sido el desprecio, explícito o implícito, a la capacidad de renovación del franquismo. Deudor en última instancia de la violencia represiva del falangismo de primera época, durante las décadas de 1960 y 1970 el aparato institucional ciertamente no evolucionó al mismo ritmo que el cambio social y económico del país. Pero se trata sólo de una verdad a medias. Una parte muy importante las élites franquistas mostró la suficiente capacidad de reacción, así como de flexibilidad táctica, como para pensar posibles escenarios de salida de la dictadura. Leyó la coyuntura en clave de una profunda renovación del Estado. Y aún más se dedicó a diseñarla enfrentada al riesgo de que cayera algo más importante que el edificio político del franquismo.⁷

Desde finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, distintos equipos formados en el campo del catolicismo y del falangismo, fueron conformando bajo estos presupuestos una suerte de «partido reformista». Su hipótesis consistía en que las transformaciones económicas y sociales, y singularmente la consolidación de unas emergentes clases medias, no sólo permitían, sino que también demandaban una importante remodelación de la arquitectura institucional franquista.⁸ De hecho, la elevación de los niveles de vida y la expansión de una incipiente sociedad de consumo, habían dado cuerpo a un fenómeno bautizado correctamente como «franquismo sociológico»; éste comprendía un cuerpo social bastante más amplio que las bases oligárquicas y las viejas clases medias que apoyaron el alzamiento de 1936. La oportunidad del reformismo franquista iba, no obstante, a la contra de ese reloj de arena que paulatinamente arrojaba a las clases trabajadoras y a las futuras clases medias (los estudiantes) al

campo de la oposición. La oportunidad del reformismo se dio finalmente a la muerte del dictador.

La «conversión demócrata» del franquismo político fue, por tanto, un hecho previsto. Para la imaginación reformista, la salida a la dictadura pasaba por la homologación con las democracias liberales del entorno pero dentro un proceso controlado por las viejas élites. En los términos de quien en principio parecía destinado a ser el director del proceso, Manuel Fraga, varias veces ministro con Franco y vicepresidente en funciones durante el primer gobierno postfranquista, el modelo se encontraba en el régimen bipartidista y oligárquico que ideara Cánovas del Castillo después de la liquidación de la experiencia de la Primera República (1874) y que históricamente se conoce bajo el nombre de Restauración.⁹ En términos sintéticos, la continuidad institucional era el principal problema de una clase política que carecía de toda legitimidad democrática. Esta debía ir sellada por la permanencia en el trono del joven monarca, a quien Franco había nombrado «sucesor» en 1969. Seguidamente, el nuevo régimen institucional debía establecer un marco de pluralismo moderado, representado por una alternativa de gobierno de carácter socialdemócrata, algo que se deduce sin ambages de la interlocución privilegiada a los distintos grupos socialistas.

Aunque, finalmente, no fue Fraga quien se encargó de llevar a efecto el programa de reforma éste acabó por imponerse tanto a la creciente movilización como a la oposición democrática. Otro «equipo», dirigido por Torcuato Fernández Miranda, convenció al rey para que nombrara presidente del gobierno a un joven carrerista dentro del aparato falangista, Adolfo Suárez. Bajo la tutela de Fernández Miranda, Suárez presentó un proyecto de reforma política que incluía la legalización de los partidos políticos y elecciones libres. Para estupefacción de la oposición, la ley de Reforma Política fue sometida a referéndum a finales de año recibiendo el apoyo del 95 % de los votos con una participación cercana al 80 %.

Éxito del reformismo

Bajo esta perspectiva, la victoria del reformismo se debe entender en relación con el papel correlativo de la oposición democrática.¹⁰ Y aquí es preciso hacer una apreciación de partida: en lo que se refiere a la construcción de organizaciones políticas, salvo los comunistas, en 1974-1975 el resto de opciones apenas superaban el



estado embrionario. A pesar de su pasado estalinista y del feroz enconamiento de la represión franquista, el Partido Comunista había conseguido adaptarse a las nuevas condiciones de la política de oposición a la dictadura. Al lado de católicos e independientes había contribuido a sostener las coordinadoras de las Comisiones Obreras, principal organización obrera al margen de los sindicatos falangistas, al tiempo que se infiltraba en los medios estudiantiles y profesionales. Sobre el resto de la oposición apenas se podía decir que superara el nivel grupuscular. Las agrupaciones que trataban de crear las sucursales españolas de las grandes corrientes ideológicas de la Europa de postguerra (democracia cristiana, liberalismo, socialdemocracia) rara vez eran algo más que pequeñas asociaciones de notables. El fenómeno era conocido en la época como los «partidos taxi», debido a su carácter casi familiar y su composición de clase media. Pero incluso las siglas históricas del PSOE, representaban poco más que un puñado de agrupaciones dispersas y poco conectadas. De hecho, hasta 1974-1976, sólo el importante apoyo de la socialdemocracia europea encaminaba al PSOE a jugar un importante papel en la política española.

Si se compara la realidad de la oposición política y la gigantesca movilización social, con centro en las fábricas, barrios y universidades, el rasgo más destacado de la época es, por tanto, la desproporción y asimetría entre ambas. A excepción del PCE y de los grupos de la extrema izquierda, la oposición no tenía presencia en los conflictos sociales. En otras palabras, su pretensión de representar el cambio no se basaba en su dirección del mismo. Más que ningún otro factor, la debilidad de la izquierda política acabó por determinar los límites de la Transición y por convertirla, paradójicamente, en su principal garante.

Se trata de una historia que ocurrió principalmente en el seno del Partido Comunista. Las aspiraciones del PCE, y especialmente de su dirección, todavía en manos de la generación de la guerra —los viejos cuadros liderados por Santiago Carrillo—, pasaban por emular la posición del PCI o del PCF. Pero convertirse en el gran partido de la oposición de izquierda, implicaba también el peaje de la moderación política y de una alianza social que debía comprender a los elementos modernizantes de la oligarquía.¹¹ El PCE de Carrillo se había preparado largamente para ello con una calculada mezcla de oportunismo, apertura de puertas fuera —lo que finalmente fraguó en la fórmula del eurocomunismo— y estalinismo interno, correctamente designado como «carrillismo». Su legalización, impuesta por la movilización en la calle, fue sin duda su principal y más notorio éxito; algo no previsto por el guión del reformismo. Pero una vez aceptado, se preocupó principalmente por desempeñar un papel responsable tanto frente a las viejas élites franquistas, como frente a la opinión pública. En lugar de ser el motor de la democratización del país, cedió rápidamente el testigo al reformismo; aceptó la dirección del proceso por las viejas élites, la ley electoral, la bandera franquista y la monarquía. En este paquete, iba incluido también el control y moderación de las luchas de fábrica. Al igual que sucedió en otros países, especialmente en Italia, la posición «responsable» del Partido Comunista resultó esencial para imponer la inflexión del ciclo de movilización.

Debido en no poca medida a este estrecho margen de acción que se autoimpuso el Partido Comunista, poco sorprende que el gran vencedor de la izquierda en las primeras elecciones de 1977 fuera el más insospechado: el renovado Partido Socialista Obrero Español. Desprovisto

EL RENOVADO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. DESPROVISTO DEL LASTRE DE LA GUERRA Y CAPITANEADO POR UNA DIRECCIÓN JOVEN QUE EMPLEABA SIN COMPLEJOS LA VERBORREA IZQUIERDISTA, COMÚN A LA ATMÓSFERA CULTURAL DEL ANTIFRANQUISMO, SE HIZO CON EL 30 % DE LOS VOTOS, TRES VECES MÁS SUFRAGIOS QUE LOS COMUNISTAS

del lastre de la guerra y capitaneado por una dirección joven que empleaba sin complejos la verborrea izquierdista, común a la atmósfera cultural del antifranquismo, se hizo con el 30 % de los votos, tres veces más sufragios que los comunistas. Sin presencia además en los conflictos sociales, la estrategia del PSOE se había desarrollado únicamente en relación con la apuesta electoral que era congruente con el papel de oposición y mediación que la solución reformista del franquismo requería. Las elecciones de 1977 dieron, de hecho, la victoria a la opción gubernamental, la Unión de Centro Democrático encabezada por Suárez.

Pactos y consenso

La revisión de la función actoral de los principales protagonistas de la Transición desprende, casi inmediatamente, la crítica de sus resultados: los grandes pactos sociales y el modelo de Estado que quedó establecido en la Constitución de 1978. Debido a la urgencia impuesta por una situación social explosiva, especialmente en relación con los conflictos de fábrica, el primer acto constituyente del nuevo parlamento no fue la redacción constitucional, sino los acuerdos económicos conocidos con el nombre de Pactos de la Moncloa. Estos fueron firmados apenas cuatro meses después de las elecciones de junio. Como en otros países, el nuevo compromiso, que reunió a todo el arco electoral a excepción de Fraga, estaba dirigido a imponer el instrumento del momento en la contención de la espiral salarios-precios: la «política de rentas». De forma muy resumida, esta consistía en sujetar los incrementos salariales por debajo de una serie de indicadores de inflación prevista, al tiempo que se promovía el creci-

LA CONSECUCCIÓN DEL PACTO SOCIAL Y ECONÓMICO PERMITIÓ QUE EL PACTO POLÍTICO CONCLUYERA POR FIN EN LA REDACCIÓN DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN. EL TEXTO FINAL, TAMBIÉN PARTICIPADO POR LAS PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS DEL PAÍS FUE, COMO CASI TODO EN LA TRANSICIÓN, EL RESULTADO DE TABLAS ENTRE EL REFORMISMO FRANQUISTA Y LA IZQUIERDA POLÍTICA

miento de los beneficios empresariales en tanto factor motor de la recuperación económica. Su éxito dependía del «consenso social», es decir, de la aceptación obrera; y esta vino de nuevo de la mano del PCE. En términos concretos aunque los acuerdos no llegaron a rebajar por el momento la conflictividad obrera, lograron contener al menos los aumentos reales de la masa salarial.

La consecución del pacto social y económico permitió que el pacto político concluyera por fin en la redacción de una nueva Constitución. El texto final, también participado por las principales fuerzas políticas del país fue, como casi todo en la Transición, el resultado de tablas entre el reformismo franquista y la izquierda política. La Constitución sancionó el reparto electoral provisto por la ley de reforma político. Este beneficiaba al bipartidismo y a las minorías políticas conservadoras de Cataluña y País Vasco, al tiempo que castigaba a los partidos minoritarios de implantación nacional, así como al voto urbano. Las vías de democracia directa o semidirecta (como el referéndum o la iniciativa legislativa popular) eran o inexistentes o estaban severamente limitadas. Las conquistas sociales y económicas del constitucionalismo europeo de postguerra habían sido incluidas en el texto, pero en la condición de meros principios orientativos. Por último, el modelo de Estado propuesto resultaba notablemente ambiguo. De un lado, se renunciaba a la tradición federal basada en la descentralización democrática de los ámbitos de decisión; de otro, tampoco se otorgaba un reconocimiento específico para el autogobierno de Cataluña, País Vasco y Galicia según un patrón plurinacional. El llamado Estado de las autonomías, establecía más que un modelo institucional acabado, una suerte de work in progress de descentralización paulatina; la negociación



de estas transferencias marcó la vida política del país durante los siguientes treinta años. Consideradas en su conjunto y si se compara con la Constitución portuguesa de 1976, que establecía que la «República [...] tiene por objetivo asegurar la transición al socialismo», la española resulta casi un precedente de los textos asépticos y tecnocráticos que han marcado el constitucionalismo europeo de los años noventa y dosmil.

“Normalización institucional”

De todas formas, y tal y como estaba previsto, la Constitución abrió la vía a la «normalización institucional» del país: elecciones municipales, generales y estatutos de autonomía. Su aceptación por parte de la mayor parte de los partidos políticos, su «condición de consenso», permitió establecer una vida política pluralista, homologable a la del resto de las democracias de Europa occidental. Integrado así el antifranquismo político y desactivado en buena medida el conflicto social, el giro moderado infiltró rápidamente las retóricas de las izquierdas.¹²

Por supuesto la historia de este proceso, del pacto entre caballeros entre las élites franquistas y la izquierda política, no debe nunca olvidar que su trasfondo fue siempre una movilización social tendente al desborde. Por eso la historia de la Transición nunca será más que

un relato de apología y justificación, sin la historia de sus alternativas, que aunque derrotadas jugaron un papel crucial dentro de la misma. Me refiero a la historia de ese movimiento obrero autónomo y radicalizado que frente a la institucionalización sindical, empujada por CCOO y UGT, trató de reagruparse en torno a las siglas históricas de la CNT. También es obligado hacer mención de la llamada izquierda revolucionaria que a pesar de su cultura grupuscular y casi siempre dogmática desempeñó un papel positivo en multitud de conflictos concretos. De igual modo, el movimiento vecinal, la contracultura juvenil, la emergencia del movimiento antinuclear, el feminismo y así hasta el referéndum de la OTAN, jalonan una época preñada de iniciativas que sin duda explican las conquistas sociales del momento, y que tratan de romper en todo momento los límites impuestos por los cauces institucionales y culturales de la nueva democracia.

De hecho, la Transición sólo fue una victoria a medias de las élites políticas. La liquidación de este espacio social, móvil y activo, hecho de luchas y movimientos cada vez más variopintos, tuvo su correlato en la debilidad posterior de la vida política y civil del nuevo régimen. La institucionalización política y sindical consideró siempre a esta actividad desbordada como su enemigo y operó sobre ella según las lógicas de la asimilación y la marginación. El resultado fue un fenómeno nuevo, hecho

de astenia y desafección política, conocido en la época como «desencanto», y que se propagó rápidamente entre las generaciones jóvenes, en muchos casos aniquiladas literalmente por la crisis (recuérdese que son los años en los que comienza la heroína). La apatía vació primero las organizaciones políticas y luego las sindicales. Especialmente entre las izquierdas que no se integraron como clase política, quedó un sabor amargo que se podría expresar bajo la fórmula de una democracia incompleta.

Sólo en el País Vasco el cierre institucional pareció quedar aplazado sine die. Las luchas de fábrica y la movilización social, enriquecida con el componente nacionalista, habían alcanzado allí cotas mucho más altas que en el resto del Estado y acabaron por producir un marco político notablemente distinto. La presencia de las formaciones armadas de ETA desplazó el conflicto a una esfera mediática y policial, que lejos de ceder en la Transición se exacerbó durante los años 1978-1980, los más sangrien-

tos del periodo. No obstante, ETA –al igual que las acciones armadas de la ultraderecha–, no dejaron de tener un lugar en los consensos de la Transición. El terrorismo se convirtió en la imagen especular de la nueva democracia española, la contraparte brutal y sanguinaria de la renuncia a los pactos de consenso. «Constitución o guerra civil» esa fue desde el principio la alternativa, que en forma de chantaje, ha servido a la democracia española.

Conclusión

Por concluir, la Transición fue un periodo abroncado y complejo, que no se deja reducir a la imagen oficial del mítico cambio tranquilo con el que se quiere apuntalar la actual democracia. Aun cuando su balance sea modesto y controvertido, aquel periodo sigue ofreciendo un gran número de preguntas políticas que pueden servir para orientarnos en la actual coyuntura.

Notas

¹ Curiosamente han sido los historiadores cercanos a los partidos de la izquierda los que más han contribuido a otorgar validez a las líneas generales de esta explicación. Así se reconoce en los trabajos y en los comentarios de los entonces próximos al PSOE (como Santos Juliá o José María Marvall), al PCE como Manuel Tuñón de Lara, o en hispanistas progresistas como Paul Preston, que han elaborado una línea de explicación que no se separa mucho de la de historiadores más conservadores, como Javier Tusell. Véase por ejemplo: José María Maravall, *La política de la Transición, 1975-1980*, Madrid, Taurus, 1981; Paul Preston, *Juan Carlos. El rey de un pueblo*, Barcelona, Plaza&Janes, 2003; Tuñón de Lara, Manuel (dir.), *Transición y democracia*, Barcelona, Labor, 1991 o Javier Tusell y A. Soto, *Historia de la Transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza, 1996.

² Efectivamente, siempre hubo una resistencia cultural e histórica que venía heredada de la intelectualidad no integrada del antifranquismo, pero que sin embargo no ha conseguido tener un impacto público suficiente hasta fechas muy recientes. En lengua inglesa se puede leer los dos... en esta misma revista..

³ Se trata de la línea principal de la historiografía del movimiento obrero. Y aquí es preciso destacar el trabajo de Xabier Doménech, *Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia*, Barcelona, Icaria, 2012; así como la monografía ya mencionada del autor *La Transición y el régimen del '78 ¿Por qué fracasó la democracia en España?*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015.

⁴ En esta dirección se orienta principalmente la monumental obra de Ferrán Gallego, *El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia*, Barcelona, Crítica, 2008. O también los trabajos de Bernat Muniesa Brito, *Dictadura y Transición. La España lampedusiana*, Barcelona, Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2005; o Juan Antonio Andrade, *El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica durante el proceso de cambio político*, Madrid, Siglo XXI, 2012.

⁵ En línea con este proceso de desmitificación del periodo, un reciente trabajo detalla las cifras, víctimas y grupos actuantes: Mariano Sánchez Soler, *La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983)*, Barcelona, Península, 2010.

⁶ La suerte del ahora reputado sociólogo global Manuel Castells, se probó por primera vez con estos conflictos «vecinales», dentro de una serie de monografías en la que éstos ocupan su única investigación original: *City*,

Class and Power. Londres / Nueva York, St. Martins Press, 1978; y *The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements*, Berkeley, University of California Press, 1983.

⁷ Julio Gil Pechorromán, *El Movimiento Nacional (1937-1977). Del partido único a Alianza Popular*, Barcelona, Planeta, 2013.

⁸ En 1960, casi el 40 % de la población activa, 4,4 millones de trabajadores se repartían a partes casi iguales entre peones del campo y campesinos independientes. En ese mismo año, los trabajadores con titulación universitaria apenas alcanzaban el cuarto de millón. Veinte años después, el número de trabajadores del campo eran poco más de un millón, una cifra ya menor de los trabajadores con titulación universitaria. Las rúbricas de «técnicos y empleados» y «profesionales y cuadros» recogida en el Censo de 1981, sumaban ya prácticamente lo mismo que la de los trabajadores industriales. Véanse Censos de 1960 y 1981.

⁹ Se trataba de una imagen compartida por la mayor parte de las cabezas del reformismo. En referencia a los primeros meses de 1976, Fraga escribe en sus memorias: «El tema del momento: cómo lograr una nueva Restauración, un consenso básico sobre las instituciones, un sistema representativo y eficaz de fuerzas políticas», Manuel Fraga Iribarne, *En busca del tiempo servido*, Barcelona, Planeta, 1987, p. 49.

¹⁰ Dentro de la nueva historiografía crítica que esta contribuyendo a minar las posiciones del régimen español conviene citar la monumental obra de Ferrán Gallego, *El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia*, Barcelona, Crítica, 2008.

¹¹ Esta línea había quedado establecida en lo que fue el único debate estratégico de cierta altura que se produjo dentro del PCE. Las posturas de algunos cuadros del interior (principalmente Jorge Semprún, Javier Pradera y el histórico Fernando Claudín) apuntaban a que el desarrollismo franquista debía cambiar la orientación del partido hacia una posición de ruptura democrática sobre la base de una alianza interclasista amplia y generosa con la burguesía. Como normalmente ha ocurrido con todas las formaciones de matriz estalinista, el debate se clausuró con la expulsión de los portavoces de esa tesis y la asunción práctica de las mismas por la dirección.

¹² En un juego de alardes simbólicos, pero que tenían enorme trascendencia para el antifranquismo, el PSOE renunció al marxismo en su último congreso de 1979, el PCE ya lo había hecho al leninismo en 1978.